

Crisis y políticas sociales en la Comunidad de Madrid

En un momento en el que resultan especialmente necesarias, estas acciones se encuentran claramente amenazadas, sometidas a un proceso de deterioro que toma fuerza cada día.

Desgobernanza y menosprecio hacia la participación social

No cabe duda de que todo esto, forma parte de una estrategia bien calculada en favor de la manipulación y en un afán desmedido por promover un clientelismo social en línea con sus objetivos.

Una variable que nos indica objetivamente el esfuerzo y la apuesta de cualquier Administración Autonómica en materia de bienestar social, es la expresión de las políticas sociales en términos de gasto.

Madrid cuenta con un nivel de gasto social en relación al PIB, muy alejado de la media general, formando parte del grupo de las comunidades autónomas peor situadas en estos términos. Una posición que se repite si se analiza el gasto público en sanidad, en educación, en servicios sociales tanto sobre indicador PIB, como sobre población protegida u otros indicadores.

El afán por deteriorar y privatizar las políticas públicas y en especial, las sociales, por parte de este Gobierno Regional se viene manifestando de manera específica en cada uno de los sistemas.

La sanidad quizás sea uno de los sistemas, especialmente abonados para este tipo de operaciones y objetivo prioritario de este Gobierno Regional en sus pretensiones privatizadoras. En las últimas legislaturas de Esperanza Aguirre, el gasto sanitario dirigido a la iniciativa privada creció un 90% mientras las inversiones cayeron un 70%. Supone que hoy, cerca del 10% de la población madrileña está siendo atendida por medios privados, porcentaje que se verá incrementado con la apertura de los nuevos hospitales de Móstoles y Villalba.

La financiación a la sanidad privada creció un 90%, mientras que las inversiones a la pública disminuyeron un 70%, pero en 2010 hubo 148 camas menos que en 2009.

Insuficiencia de camas

A pesar de los recursos destinados a su construcción y el gasto que supondrá para las arcas públicas durante los próximos treinta años, los nuevos hospitales no han resuelto la insuficiencia de camas en la región y solo han servido para incrementar la ratio de camas por mil habitantes de 2,20 en 2006 a 2,26 en 2010. De hecho y según los datos de las Memorias del propio SERMAS, existiendo más hospitales en la región en 2010 hubo 148

Coordinación del Tema del Mes:

Secretaría de Política Social e Igualdad
de CCOO de Madrid¹

EN NUESTRA REGIÓN se han implantado las más diversas fórmulas de gestión generándose un panorama caótico de *desgobernanza*. Modelos tradicionales, concesiones administrativas, contratos públicos, conciertos, fundaciones, empresas públicas, cheques servicio son algunos ejemplos. Se llega incluso a sostener redes de atención, servicios y programas educativos, sanitarios y sociales bajo el formato de la subvención, con la justificación de promoción de un tejido social al que se le niega, por otra parte, el derecho a la participación que constitucionalmente tienen y tenemos reconocido.

Otro de los ataques directos a la línea de flotación de nuestro actual modelo de protección social que pone en serio riesgo las bases fundamentales del Estado Social en la región, es la actitud de menosprecio hacia la participación social. La inexistencia, supresión ó simple desconsideración de los órganos de participación social ha limitado e incluso anulado la posibilidad de seguimiento y supervisión de la sociedad civil organizada, pero también su capacidad de propuesta y corresponsabilización.

¹ Extracto del documento aprobado en el Consejo Regional de CCOO de Madrid en noviembre de 2011.



TEMA DEL MES / Crisis y políticas sociales en la Comunidad de Madrid

camas menos que en 2009, sin contar las 427 del Hospital Clínico San Carlos cerradas por obras que deberán ser puestas nuevamente en funcionamiento. Para CCOO los procesos de modernización, aún necesarios, no deben suponer en ningún caso pérdida de recursos.

Además estas instalaciones hospitalarias no convencen a los madrileños, presentan numerosas deficiencias en su construcción y funcionamiento, resultando entre tres y cinco veces más caros que las fórmulas tradicionales. Aunque las plantillas de los centros sanitarios permanecen estables, se ha producido un importante incremento de contratos eventuales, en detrimento de las interinidades, lo que supone una pérdida de calidad en el empleo y un riesgo de futuro para la continuidad de estos profesionales, teniendo sus consecuencias en la calidad del servicio sanitario.

Mala gestión

La mala gestión se hace evidente en sanidad cuando se generan listas de espera en niveles de atención como la primaria ó en pediatría (relacionado, en este caso, con el alarmante déficit de profesionales), apostando además, por un modelo asistencial de clara tendencia *hospitalocentrista* y denostando este primer nivel de atención junto a la salud pública, como instrumentos básicos de prevención.

La controvertida e injustificada implantación del Área Única Sanitaria, contestada por todo el sector sanitario y especialmente por CCOO, está generando importantes problemas de gestión diaria de la actividad sanitaria repercutiendo en la calidad asistencial que reciben los ciudadanos y ciudadanas.

Opacidad absoluta en la gestión. El Consejo de Salud, ni tan siquiera constituido, fue arrastrado por el tsunami de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2011. La Consejería de Sanidad persiste en el incumplimiento sistemático de la normativa estatal sobre criterios de cómputo de listas de espera quirúrgica para maquillar la realidad.

Sin embargo, los madrileños y madrileñas seguimos valorando muy positivamente la sanidad madrileña, aunque somos conscientes de la deriva que están tomando y de su empeoramiento, desde que la sanidad fue transferida y por tanto gestionada por la Administración Autónoma, según datos del último Barómetro Sanitario.

El futuro es incierto. La amenaza de más recortes, de más privatización, de la implantación de mecanismos de cofinanciación (copago) ya teorizadas por el propio Gobierno, están en el horizonte más inmediato.

Ejes fundamentales

Tanto el sistema sanitario como el educativo son ejes fundamentales de eliminación de desigualdades y piezas claves en la contención de las consecuencias de la crisis y para la salida de la misma.

La educación es un pilar básico para el crecimiento personal y sociolaboral de cada individuo, y para el desarrollo de un país en su conjunto. En un contexto económico como el actual, más y mejor educación de ser un objetivo fundamental en el cambio de modelo productivo. Los recortes que el Gobierno Regional está aplicando bajo la justificación de la crisis esconden el objetivo de desgastar el modelo de escuela pública.

Sin embargo, el retroceso en la enseñanza madrileña en los diez años de gestión del PP en el ámbito autonómico, es incuestionable lo que obliga a una revisión y reorientación urgente de la política educativa regional. Todos los indicadores ponen de manifiesto dicho retroceso, que se ve agudizado por los recortes que el Gobierno Regional está aplicando bajo la justificación de la crisis y que de forma evidente, esconden el objetivo de desgastar el modelo de escuela pública.

Tanto en indicadores de escolarización, como en gasto, como en indicadores de resultados, podemos calificar la gestión educativa de Esperanza Aguirre de muy deficiente. El carácter compensador de las políticas educativas brilla por su ausencia, se abandona al alumnado con mayores necesidades de atención educativa tomando una dimensión segregadora y profundizando en la brecha de las desigualdades. La educación pública pierde calidad, mientras se favorecen y promueven maniobras privatizadoras dirigidas a otras Administraciones, que rayan el chantaje.

Conflicto educativo

En la enseñanza pública no universitaria, las instrucciones aprobadas por el Gobierno el pasado julio, no hacen más que profundizar en esta dinámica. Los recortes suponen reducir drásticamente el profesorado madrileño en 3.000 profesoras y profesores menos en secundaria, que junto a los recortes ya realizados el curso anterior en primaria, significa que el sistema educativo madrileño cuenta con cerca de 5.000 efectivos menos en solo dos cursos. Y en el ámbito universitario, cuestionando el papel de servicio público de las universidades madrileñas, cuya financiación ha sido objeto de recortes crecientes desde 2008, mermando hasta en un 10% las partidas destinadas a gastos corrientes, investigación e inversiones en infraestructuras.

Todo ello bajo planteamientos populistas que claman la realización inevitable de "esfuerzos colectivos" y no dudan en construir una imagen distorsionada de unos "falsos privilegiados", convirtiendo al profesorado en el chivo expiatorio de sus objetivos.

Mientras tanto, se ponen en marcha reformas fiscales dirigidas a desgravar los gastos escolares de las familias con mayores ingresos. Doble moral; necesidad de control del gasto, un ahorro que dicen ascenderá a 100 millones de euros, mientras se permiten el lujo de dejar de ingresar a las arcas públicas autonómicas 80 millones, fruto de su política de desgravaciones.

Agresiones directas a la enseñanza pública, que han derivado en un amplio conflicto social, en el que participan todos los estamentos de la comunidad educativa, profesorado, alumnado y familias, arropadas por un amplio movimiento ciudadano que se ha dado en llamar la marea verde y que ha logrado difundir los valores de la escuela pública, al tiempo que ha acabado por forzar la apertura de las mesas de negociación entre la Administración y los sindicatos, en la enseñanza no universitaria; y que en la universidad han generado un rechazo unánime, tanto hacia los recortes, como hacia la pérdida de derechos laborales que se termina derivando de ellos. Un conflicto gobernado por CCOO y su Federación de Enseñanza, que traspasa la frontera de lo sectorial, de lo estrictamente profesional, en defensa de un modelo de escuela pública, como garantía de cohesión y de salud democrática.

Desventajas de carácter estructural

El impacto de la gestión del Gobierno Regional en servicios sociales tiene sus particularidades. Se trata de un sistema que parte de una situación de desventaja con respecto a otros. Desventajas de carácter estructural relacionadas con sus propios orígenes, su característico proceso de evolución, el modelo de articulación y financiación, y el tímido refrendo constitucional, entre otras.

Así y a pesar de los avances legislativos y económicos que han experimentado los servicios sociales, se siguen entendiendo desde una perspectiva reduccionista. Se consideran una "concesión" y no un derecho, muy alejado por tanto, de lo que ocurre en sanidad o en educación.

En la Comunidad de Madrid, los servicios sociales son el sistema con mayor grado de participación de la iniciativa privada. Un sistema más débil



TEMA DEL MES / Crisis y políticas sociales en la Comunidad de Madrid

y en definitiva, más expuesto y vulnerable a recortes, procesos de desestabilización y deterioro. De hecho, los servicios sociales se han convertido en el campo de experimentación de las fórmulas de gestión más dispares en políticas sociales. Aquí se prueban y después se trasladan a otros sistemas. Por ejemplo el modelo PFI, de los nuevos hospitales, es el modelo consolidado de la atención residencial. Existe el cheque servicio bajo el metafórico nombre de "prestación vinculada" ó el copago instalado en este sistema desde el principio de los tiempos.

En la Comunidad de Madrid, los servicios sociales son el sistema con mayor grado de participación de la iniciativa privada. De hecho y exceptuando la atención primaria de competencia municipal, la gestión pública directa no supera el 30%. El resto de los recursos que integran la red autonómica, lo que comúnmente se conoce como servicios sociales especializados, están directamente en manos privadas.

Dependencia

Desde todos los ámbitos se estimaba que la puesta en marcha y desarrollo de Ley de Dependencia, supondría un espaldarazo al sistema de servicios sociales. Nada más lejos de la realidad en la Comunidad de Madrid. La pésima gestión del Gobierno Regional en esta materia, ha convertido el derecho de atención a la dependencia, en un auténtico lastre para los servicios sociales. Uno de cada seis dependientes madrileños, con derecho, sigue sin recibir atención.

Como hemos denunciado desde CCOO en múltiples ocasiones, Madrid ocupa, desde la entrada en vigor de la Ley, los últimos puestos en prácticamente todas las variables que indican su grado de desarrollo. Retrasos, vulneración de derechos, discrecionalidad en los procedimientos, caos generalizado, desinformación, listas de espera, desprotección e indefensión jurídica y social, son las señas permanentes de identidad de la gestión del Gobierno Regional en esta materia.

En pleno ecuador del proceso de implantación de la Ley, uno de cada seis dependientes madrileños con derecho siguen sin recibir atención, mientras la Comunidad de Madrid se dedica a manipular los datos, elaborando estadísticas propias que rompen los acuerdos de cómputo establecidos con el Gobierno de España, acuerdos que, por otra parte, implican al conjunto de las comunidades autónomas.

Sin embargo, los datos son tozudos y demuestran mes tras mes, el desbarajuste regional. Con miles de personas dependientes en lista de espera, en cuatro meses se ha reducido en más de 2.000 plazas la atención residencial.

Una cuestión que resulta muy preocupante es el modelo de atención que se está promoviendo. Se apuesta por servicios de bajo coste, que con escasa inversión profesional y material aportan una gran cobertura, en detrimento de otros servicios más profesionalizados y de mayor intensidad.

Destrucción de empleo

La expectativa de generación de empleo se ha quedado por el camino. Junto con el escaso desarrollo de la Ley en Madrid y al modelo de atención que se está instalando, la crisis económica y los problemas de financiación de las Administraciones, se está produciendo una incesante destrucción de empleo en el sector de atención a la dependencia y un claro empeoramiento de las, ya de por sí precarias, condiciones de trabajo. Ejemplo de ello, es el conflicto permanente al que se ven abocadas las compañeras del Servicio de Ayuda a Domicilio en defensa de sus salarios y del empleo.

Ante este desorden generalizado y desgobierno, el Observatorio Social de la Dependencia, integrado por CCOO, UGT, CECU y Vecinos se convier-

te, desde el reforzamiento de la unidad de acción y de la alianza con la sociedad, en una de nuestras principales herramientas de denuncia, pero también de defensa de este, ya no tan nuevo, derecho de ciudadanía.

La finalidad del sistema regional de servicios sociales es la promoción del bienestar, la prevención de las situaciones de riesgo, asegurando el derecho a vivir dignamente. En la Comunidad de Madrid, además, el sistema público de servicios sociales debería jugar un papel esencial, en términos de prevención y contención de las consecuencias que la crisis está provocando en la sociedad madrileña. No en vano, la finalidad del sistema regional de servicios sociales, tal y como se recoge en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, es la promoción del bienestar, la prevención de las situaciones de riesgo asegurando el derecho a vivir dignamente.

Cada vez son más los madrileños y madrileñas en posiciones de riesgo de pobreza y exclusión social. En tres años ha aumentado un 150% el número de personas desempleadas que no cobran ningún tipo de prestación. Cerca del 53% de los hogares madrileños tienen dificultades para llegar a fin de mes, mientras los gastos mensuales medios de las familias se han incrementado en un 25%.

La pobreza crece

La pobreza crece en Madrid. Ya lo hacía en momentos de bonanza económica y ahora se agudiza. El 14% de la población se encuentra en situación de pobreza en Madrid y no se trata de la pobreza que tenemos en el imaginario social. Hablamos de una nueva pobreza, más cercana, más conocida. En tres años ha aumentado un 150% el número de personas desempleadas que no cobran ningún tipo de prestación. Y el 14% de la población se encuentra en situación de pobreza en Madrid.

Desde CCOO venimos exigiendo un Plan de Choque Regional contra la crisis, donde la protección y atención a las personas sea un elemento central y prioritario. La Renta Mínima de Inserción debe ser reforzada y puesta en valor, haciendo efectivo el objetivo por la que fue creada; cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía y garantizar el derecho a la inserción social.

Entretanto, la pasividad del Gobierno Regional y el desprecio más absoluto a la concertación social, provoca que las dificultades se estén cronificando y se intensifiquen las situaciones de desprotección. Su solución; recortes en políticas sociales, paralización de las políticas activas de empleo y reducción del presupuesto destinado la lucha contra la exclusión social, limitando las respuestas.

Un sistema amenazado

En suma, el futuro de los servicios públicos, como derechos básicos de la ciudadanía, se encuentra seriamente amenazado. La derecha impone su lógica, ahora desde unas enormes cotas de poder, en todos los ámbitos de la Administración. Y así, desde la coartada de la crisis, con los votos de su parte y el contexto de ajuste europeo, los gobiernos del PP se van sumando a la fiesta de recortes en los servicios públicos, donde el gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido pionero. Los presupuestos regionales para 2012 y la *LEY 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas*, unidos a la suma de todos los tijeretazos asestados a la educación, la sanidad y los servicios sociales, muestran la virulencia de las agresiones del gobierno regional hacia nuestro Estado del Bienestar. Por su parte, los anuncios del gobierno de Rajoy evidencian un total desprecio por el Estado social, frente al control del déficit. Por eso, la respuesta ciudadana debe ser articulada y contundente. Porque la defensa de los servicios públicos es, en este momento, un requisito imprescindible de nuestro futuro y de nuestra democracia.